

Estamos ante el final del principio. Ahora tenemos la responsabilidad de profundizar en esta nueva etapa evitando cometer los errores del pasado. Compartir, cooperar, colaborar y acordar son las guías que deben mover la actuación de todos y todas. Oportunidades como ésta no se repiten dos veces en la vida y nos merecemos intentarlo y conseguirlo.

Paul Ríos es coordinador de Lokarri.



4. Euskal Herria, el día después

Tiempo de tejer complicidades desde la izquierda

Petxo Idoyaga

El conflicto nacional es anterior a que ETA naciese y continúa tras la declaración del cese definitivo de la lucha armada el pasado 20 de octubre. Pero dicho cese provoca una alteración total del escenario en que se producía tal conflicto, modifica profundamente las coordenadas de los demás conflictos sociales y políticos en Euskal Herria y abre la posibilidad de que se renueven los debilitados lazos de solidaridad entre la izquierda vasca y la del Estado español (es de esperar que la abstención de Amaiur en la investidura de Rajoy sólo sea un momentáneo descoloque político).

No hay dudas sobre ese final de la lucha armada. Se produzca o no algún episodio minoritario, ha desaparecido el papel que ETA tenía en la vida política vasca y el que ejercía como referencia central para un sector de la izquierda abertzale. La garantía de ello es que el calificativo “definitivo” ha sido afirmado de manera unilateral por ETA y, sobre todo, que lo ha sido como consecuencia de la decisión de la izquierda abertzale civil al imponer una estrategia que exigía dejar la violencia fuera de la confrontación política.

Aunque se hayan constituido como plataforma entre corrientes distintas, la doble explosión electoral de Bildu y Amaiur representa, en particular, la reaparición civil y social de la izquierda abertzale, de lo que, como organización, representaron Herri Batasuna (1978-2001) o Batasuna desde 2001 hasta su ilegalización en 2003: un movimiento popular independentista, interclasista sí pero también en sintonía con las perspectivas emancipadoras de los movimientos sociales y los derechos de la clase obrera y dentro del cual las gentes anticapitalistas, de izquierda socialista, del feminismo y del ecologismo tienen una presencia significativa. ETA era ya un tapón para que la izquierda abertzale pudiera competir con el PNV en el liderazgo político del nacionalismo vasco. Sin ETA, esta competencia política constituirá un de los factores más dinámicos de los próximos tiempos.

Pero ETA era, también, un tapón para que se marcara un claro perfil socialista en las actividades e iniciativas e incluso en los discursos de la izquierda abertzale. La enorme referencialidad de la lucha armada (incluida las consecuencias en cárceles y exilio), imponía a toda la izquierda abertzale un escenario político reducido a la lucha de liberación nacional y a la confrontación contra la represión del Estado. Esto mismo impedía, más aún, que esas fuerzas socialistas de la izquierda abertzale impulsaran un movimiento socialista unitario más amplio, integrador de otras experiencias políticas, sociales o sindicales anticapitalistas y, al mismo tiempo, plural y democrático. Euskal Herritarrok fue, quizá, una experiencia que apuntaba en ese sentido, pero en la práctica no pasó de ese apunte. Hoy existen nuevas condiciones para plantear un reforzamiento plural y unitario de la izquierda socialista vasca.

Las cuestiones inmediatas tienen un peso político importante y condicionarán el futuro. El movimiento para modificar la política penitenciaria está teniendo iniciativas inteligentes por parte de las presas y presos y ganando aun mayor solidaridad de la importantísima que siempre ha tenido. La declaración del Acuerdo de Gernika sobre las víctimas, incluyendo expresamente a las provocadas por ETA, considerando que, también en éstas, se ha producido “*vulneración de sus derechos más elementales*” y reclamando el conocimiento de la verdad sobre cada víctima, marca un campo al que más bien antes que después deberá bajar la propia ETA a reconocerlo. Otra de las cuestiones inmediatas es la del espacio político que va a ocupar Sortu tras su (esperamos) legalización, tema al que nos referiremos más adelante.

Per todo lo indicado es sólo el inicio de un nuevo proceso y en absoluto hay certezas de que vaya a consolidarse, siquiera, un espacio político más democrático y socialmente más justo y solidario en Euskal Herria y, por extensión, en el conjunto de los pueblos bajo la administración de España. En las siguientes líneas se balbucean algunas reflexiones sobre cómo enfrentarse a tales incertidumbres y abrir nuevos caminos.

Los relatos sobre el pasado

En recientes artículos publicados en la web de *VIENTO SUR*, Miguel Romero, Ramón Zallo y otra gente han contestado ya al relato que presenta la historia de los 52 años de conflicto vasco en los que ETA ha existido, como los de la mera confrontación entre demócratas y violentos y su fin como el de la victoria del Estado de derecho. Combatir ese relato es básico para resistir la derechización política y social que nos viene encima. Pero no repetiré argumentos y me remito a lo publicado en *VIENTO SUR*.

Desde ese frente común contra el relato oficial, es necesario reflexionar y debatir, en nuestro propio campo de izquierda soberanista y anticapitalista, sobre nuestros relatos.

La izquierda vasca compartimos muy ampliamente que el cese definitivo de la violencia de ETA ha abierto las puertas a un importante impulso popular por los derechos democráticos y sociales y por un proceso de paz en el que el conflicto nacional se dé en términos exclusivamente políticos.

Pero hay otro relato que no compartimos aunque tenga predicamento en la izquierda abertzale. El de que ha sido posible abrir este nuevo proceso político porque ETA ha mantenido la lucha armada tras la llamada Transición y, gracias a ello, ha polarizado un movimiento social contra un contexto constitucionalista que amenazaba a la singularidad nacional vasca. En tales condiciones, la historia de ETA y de la izquierda abertzale sería, globalmente, un acierto estratégico pleno y el dolor que haya infligido la violencia se justificaría éticamente en ese contexto de resistencia en el que, además, la violencia represiva del Estado ha sido brutal.

El análisis sobre la violencia de ETA debe, por supuesto, contextualizarse. Pero en el contexto político parlamentario post-franquista, debe considerarse como un error estratégico y ético. Y esta conclusión deja atrás, definitivamente sin espacio político, esa idea de la violencia armada como crisol de la lucha popular contra un sistema parlamentario occidental como el nuestro, por mucho déficit democrático que tenga.

La historia de ETA es insustituible para entender el contenido y la forma en que emergió y se consolidó en Euskal Herria un movimiento de resistencia radical contra el franquismo, de afirmación nacional independentista y de genéricas referencias de izquierda. Pero después, tras la sustitución de la dictadura por una democracia parlamentaria homologable a las de su entorno, la lucha armada no tenía ni razón ni utilidad política. Además, la violencia de ETA sufrió un proceso degenerativo, que arrastró tras de sí a la izquierda abertzale.

El 19 de junio de 1987 una bomba de ETA mató a 21 personas e hirió a 45 en un centro comercial de Hipercor en Barcelona, tan sólo 9 días después de que en las elecciones al Parlamento Europeo, de los 360.952 votos de Herri Batasuna, 110.992 los obtuviera fuera de la Comunidad Autónoma del País

Vasco (CAPV) y Navarra y, de ellos, 32.262 en Barcelona. Se marque o no esa fecha como muestra de la involución de ETA, lo cierto es que el escenario político había cambiado ya antes y no se mantenían las condiciones para que la lucha armada tuviera el sentido y la legitimidad que podía darle su confrontación con una dictadura. El PSOE había ganado las elecciones en 1982, se había entrado en el Mercado Común en 1983, la propia izquierda abertzale tenía organizaciones y medios de comunicación legales y un notable éxito electoral...

Tras Hipercor se formaron los Pactos Antiterroristas y se desarrolló en Euskal Herria un movimiento de repulsa a ETA que protagonizó constantes concentraciones con un lazo azul en la solapa. ETA se enrocó con unos objetivos armados que multiplicaban el riesgo de confrontación social (los secuestros y, sobre todo, los atentados mortales contra miembros de partidos políticos). En ese mismo contexto nació la *kale borroka* y la defensa de ETA se convirtió en el eje principal de acción política de la izquierda abertzale con la estrategia de la “*socialización del dolor*”.

La repulsa masiva a la muerte del concejal del PP, Miguel Ángel Blanco, en julio de 1997, demostró claramente el error estratégico y ético de ETA. Sólo con anteojeras de plomo puede entenderse esa movilización como simple efecto de la manipulación. Se vivió el riesgo de confrontación social lo que habría sido terrible y habría significado, además, que la izquierda abertzale quedara socialmente marginada y represivamente destruida.

Pero ni esa ni otras movilizaciones de repulsa a ETA, fueron, tampoco, de apoyo al gobierno de España y a su política represiva y anti-vasca. Al contrario, antes, durante y después de ese mes de julio de 1997 se fue configurando una mayoría de opinión pública vasca que unía su rechazo a ETA o, al menos, el deseo de que la lucha armada parase, con el rechazo a la cerrazón represiva del Estado, y, ambos, con una manifiesta voluntad de soberanía nacional.

Este clima social es lo que ha llevado a la izquierda abertzale civil a imponer, finalmente, una estrategia incompatible con la violencia armada.

Hay que construir, pues, un relato alternativo al que sostiene un sector de la izquierda abertzale. A la “razón de Estado” debe contraponerse, con toda radicalidad, la razón de los derechos nacionales de Euskal Herria. Pero en un marco de democracia parlamentaria como el nuestro, la lucha armada obstaculiza las vías de la acción política popular por tales derechos y no tiene justificación ética/1.

1/ No se juzga aquí el sentimiento de compromiso político personal de las decenas de militantes vinculados a ETA en todos estos años. La tesis de su error estratégico y ético para nada niega que ETA deba entenderse vinculado al conflicto político vasco.

Marcar el horizonte del independentismo y la “hoja de ruta” del soberanismo

La independencia del Estado español y del francés es una positiva reivindicación para quienes defienden la constitución de una Euskal Herria territorialmente integrada y políticamente soberana. En las condiciones institucionales actuales, en la “Europa de los Estados” expresarlo bajo la forma de Estado vasco independiente tiene legitimidad democrática y coherencia política.

Pero el horizonte político del independentismo debería incluir la definición de Euskal Herria como parte de una Europa de naciones o comunidades institucionalizadas sobre identidades políticas y culturales libremente compartidas, autogestionadas internamente y sosteniendo con las demás comunidades relaciones solidarias –y en lo que se decida- competencias comunes. Ese es un buen horizonte frente a la actual Europa de los Estados. Y cuando ésta tiene, además, la desvergüenza de dejar las políticas económicas en manos de esa pléyade de bancos de inversión, fondos especulativos y compañías de seguros a los que clandestinamente llaman “mercados”, debería añadirse que la perspectiva de la izquierda vasca es la de una Europa socialista de pueblos libres.

Pero además de ese horizonte final, hace falta definir una hoja de ruta por la que caminar hoy hacia la resolución del conflicto nacional vasco y hay que definir su punto de partida.

Hoy no podemos hablar de Euskal Herria como una comunidad que se haya afirmado políticamente como nación. Pero sus territorios comparten lazos históricos, una lengua propia y sinergias de diverso tipo desde lo político a lo cultural. Por ello casi toda la tradición cultural, intelectual, popular y política ha utilizado la expresión Euskal Herria y ha reconocido la identidad común de sus territorios.

Sin embargo existen distintas perspectivas sobre su futuro como comunidad política. Por eso, el punto de partida que hoy corresponde al conflicto nacional, no es la independencia sino la soberanía, el derecho a decidir sobre sus relaciones administrativas con las comunidades del entorno. Este es un criterio que atiende con el mismo rasero democrático las legítimas aspiraciones de independentistas, federalistas o unionistas. El sujeto de tal decisión sólo puede ser el conjunto de personas que viven en nuestro país. Y dada la diversa situación administrativa entre los distintos territorios vascos, es lógico que tal derecho deba plantearse expresamente dentro del Estado español.

Es evidente que la CAPV y Nafarroa constituyen dos comunidades autónomas distintas en la actual administración española y que, además, las expresiones sobre la identidad nacional vasca tienen pesos y rasgos distintos en ambos territorios. También a ello hay que responder en términos de pura democracia, tal como recogía el programa de Amaiur: *“el respeto a la voluntad democrática de la ciudadanía de los cuatro territorios de Hego Euskal Herria*²

²/ “Hego” significa sur y el término engloba los tres territorios de la CAPV y Nafarroa.

teniendo en cuenta la realidad política de Navarra y respetando las decisiones que los y las navarras tomen”.

Pero a esos puntos de partida debe seguirle una hoja de ruta que está por definir. La *Propuesta de Estatuto Político para la Comunidad de Euskadi* -el Plan Ibarretxe- fue un paso adelante en este sentido (Idoyaga y Zallo, 2003). Un paso posterior fue el acuerdo con el que el 31 de octubre de 2006 se retiraron de Loiola las delegaciones de PNV, PSE-PSOE y Batasuna y que quedó roto cuando volvieron a reunirse antes las modificaciones exigidas por ésta última bajo presión de ETA (Idoyaga, 2008). Tras reconocer “*la identidad nacional del Pueblo Vasco*” y “*el sentimiento de pertenencia a una nación*” de sus distintos territorios y aun subrayando “*que los partidos mantenemos diferencias sustanciales en torno a la presente y futura configuración del pueblo Vasco*”, el acuerdo planteaba la siguiente hoja de ruta:

Partiendo de la actual realidad jurídico-política plasmada en la existencia de dos ámbitos institucionales diferenciados/³, nos comprometemos a promover la creación de un órgano institucional común para los cuatro territorios. Este órgano institucional tendrá la atribuciones ejecutivas y de propuesta legislativa en el marco competencial que se acuerde, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Dichas atribuciones serán objeto de negociación durante el transcurso del diálogo multipartito.

Si la izquierda abertzale dejara públicamente claro que está dispuesta a tomar el acuerdo de Loiola como punto de partida para una negociación entre todas las fuerzas políticas, estaría allanando esa hoja de ruta hacia la solución del conflicto vasco.

Razones y límites de la resistencia a la crisis desde las instituciones políticas

La izquierda abertzale tradicional tiene, como tal movimiento político (Batasuna), una soleada narrativa identitaria independentista, mientras que la que tiene de izquierda es poco luminosa. LAB, un sindicato de serio perfil anticapitalista, forma parte de la izquierda abertzale. Pero la iniciativa política anticapitalista y socialista de Batasuna como tal ha sido apenas marginal. Además, en el nuevo escenario político y social de Euskal Herria Bildu gobierna en la Diputación de Gipuzkoa y 123 alcaldías y, obviamente, tiene que gestionarlas en tiempos de crisis y heredando, en muchos casos, tesorerías llenas de telarañas/⁴.

³/ Se refiere a la CAPV y a Nafarroa.

⁴/ La de la Diputación de Gipuzkoa, por ejemplo, ha venido disminuyendo la presión fiscal desde al menos 2007, mientras que los gastos –bajo la presión de las grandes infraestructuras- se mantenían o subían. El resultado es que el endeudamiento ha subido de 270 millones de € en 2007 a 568,2 en 2001, mientras que el remanente ha bajado de 339,1 millones a 73).

“El punto de partida que hoy corresponde al conflicto nacional, no es la independencia sino la soberanía, el derecho a decidir sobre sus relaciones administrativas con las comunidades del entorno”

En la última campaña electoral el discurso de Amaiur sobre la crisis y sus consecuencias ha sido muy pobre. Amaiur tiene razón cuando dice que no se trata de tener un programa electoral que ocupe páginas y páginas. Pero en unas elecciones hay particulares condiciones para explicar y denunciar lo que hay detrás de esta crisis y para subrayar, al menos, las líneas gruesas de una alternativa de resistencia a la misma. Las consecuencias sociales de la crisis actual son demoledoras, pero van acompañadas de un discurso que oculta sus razones y legitima las políticas de austeridad. Sería de ciegos no ver,

desde la izquierda, el poder que tiene ese discurso sobre el propio pueblo trabajador, su capacidad de paralizarlo.

Había que explicar, pues, que esta crisis nació por el endeudamiento de los bancos, pero que gracias a las inyecciones de dinero que han recibido de los Estados y de las instituciones comunitarias al 1 % de interés, no sólo han salido de ella sino que la han traspasado a esos mismos Estados a base de adquirir su deuda a intereses salvajes y que esto lleva a los Estados a imponer políticas antisociales, desempleo y austeridad. Pero además de para analizar la crisis, las elecciones eran un buen escenario para popularizar tres frentes contra las políticas de austeridad: a) que los Estados no deben pagar las deudas con las que les aprietan las instituciones financieras porque son deudas producidas por éstas, b) que para tener fondos para aplicar políticas sociales justas debe aflorar el enorme fraude fiscal existente y debe darse un vuelco radicalmente progresivo a la política fiscal, c) que las políticas económicas deben unir la disminución del paro y el aumento del peso de los salarios, incluso si el efecto de hacerlo no garantizara una salida de la crisis (aunque tendría, sin duda, efecto de relanzamiento de la producción y el consumo).

Pero el discurso de Amaiur se ha centrado, sobre todo, en afirmar que si Euskal Herria tuviera un Estado propio aplicaría una política social alternativa y, en base a ello, a reclamar tal Estado. Ocasionalmente esta afirmación puede estar bien. Pero detenerse prácticamente en ello no suscita ninguna resistencia frente a la crisis y olvida que el Estado español es el que gobierna en Hego Euskal Herria y contra él debe enfrentarse el pueblo trabajador vasco cogido de la mano del de todo el Estado español.

No hay que vender humo. Realizar una buena campaña electoral y obtener siete parlamentarios sirve para exteriorizar todo eso en un volumen más audible, no para imponer los tres frentes citados. Pero incluso ese poco es mucho en estos tiempos y debía ocupar en la campaña electoral un espacio que ni de lejos ocupó.

Y más allá de la campaña está, lo que es mucho más importante, la gestión institucional. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la Diputación de Gipuzkoa hubiera tomado estas tres medidas que le propuso el sindicato ELA?: aflorar todo el fraude fiscal que está tapado, aprobar una presión fiscal del 39% del PIB (que implicaría una fuerte subida de siete puntos, pero no supondría sino llegar a la actual media de la eurozona) y dar un vuelco a las aportaciones por rentas del trabajo y del capital. No habría sido ni la revolución ni el socialismo, pero sí una ejemplar manera de obtener fondos para el gasto social.

Pero la gestión institucional en el contexto actual es complicada. En la creación del Banco Kutxa Bank desde las Cajas de Ahorro de la CAPV, el apoyo de Bildu dio mayoría absoluta a un proyecto que pone en crisis el papel que podrían y deberían jugar las Cajas de Ahorro como instituciones financieras públicas. Pero también es cierto el peligro de que la Caja de Gipuzkoa –la Kutxa- quedara aislada y a riesgo de OPAs hostiles si sólo entraban en el proceso las de Bizkaia y Araba, como también lo es que Bildu introdujo algunos elementos correctores al modelo de bancarización que estaba proyectado.

En los presupuestos de Gipuzkoa aprobados en diciembre, Bildu sabía que si en las Juntas Generales se mantenían las enmiendas a la totalidad de PNV, PSOE y PP, la propuesta que había presentado ni se discutiría y debería gobernar dando continuidad al presupuesto anterior y ante ello optó por un acuerdo con el PNV que retiró su enmienda a la totalidad a cambio de 10 millones de € para las empresas y de dejar en el aire la paralización del anti-ecológico proyecto de una gran incineradora en Zubieta, aunque sea bajo el argumento de que lograrán un apoyo mayoritario de Ayuntamientos y Mancomunidades para otro modelo de gestión de residuos que haga innecesaria la incineradora.

En política fiscal –y, en este caso, mediante pacto con el PSOE- además de recuperar el impuesto del patrimonio (también lo han hecho Araba y Bizkaia aunque con topes de exención superiores por vivienda y mínimo personal), Bildu ha conseguido que en la tarifa del IRPF se establezcan tres nuevos tramos en la escala alta para los ingresos superiores a 90.000€ (46%), a 120.000€ (47%) y a 175.000€ (49%), mientras que en Araba y Bizkaia el único tipo aplicable a partir de 64.970€ es del 45%, ha subido el tributo por ingresos del capital hasta el 23% o ha eliminado la exención absoluta del impuesto sobre sucesiones que existía en el caso de las herencias. Pero el conjunto de esas medidas supone un aumento de ingresos pequeño y la presión fiscal sigue estando demasiados puntos por debajo de la media de la eurozona. En consecuencia la diputación de Gipuzkoa aplicará, también, medidas de austeridad que repercutirán en las prestaciones sociales

Y, en fin, Bildu está tratando crear dinámicas de participación no sólo para “informar” a la ciudadanía, sino para recabar su intervención, aunque la verdad sea dicha, eso es realidad en gran parte de los Ayuntamientos en que gobierna y apenas en lo relacionado con la Diputación de Gipuzkoa.

“¿Se abstendrá Amaiur cada vez que el Gobierno vote una ley de recortes sociales o derechos civiles? (...) Esperemos que sea una inmadurez política momentánea y se restablezca la voluntad de tejer complicidades.”

Es pronto para cerrar un balance de todo esto y, mucho más, para estigmatizarlo con una pura y global condena. Mucho más cuando el ambiente y la fuerza social no tienen la potencia para llevar en andas a una gestión institucional que marque políticas sociales de izquierda al 100%. Pero Bildu debe saber que no podrá sostener al mismo tiempo políticas sociales de izquierda y pacto con uno u otro de los grandes partidos y que, por tanto, encerrarse en habilidades institucionales en lugar de promover la movilización y la resistencia sería, a largo plazo, dar todas las cartas buenas de la baraja a la derecha. Por lo tanto debería considerar que, antes o después

deberá comprometerse con actitudes de desobediencia a normas e instituciones superiores.

“Tejer complicidades”

El cabeza de lista de Amaiur por Bizkaia ha repetido varias veces esta hermosa expresión para indicar lo que quieren hacer en Madrid, como grupo parlamentario. Es una idea positiva de deslealtad parlamentaria, de considerar que sus actuaciones en el Parlamento serán tanto para recabar la solidaridad con el derecho de autodeterminación para Euskal Herria como para apoyar los derechos y demandas del pueblo trabajador de todo el Estado español y no para gestionar la gobernabilidad del Estado. Pero si, como ya se ha analizado antes, el discurso frente a la crisis se basaba en un caparazón de casi exclusivamente nacionalismo olvidándose de que el Estado que nos gobierna es el de Madrid, la abstención de Amaiur en la investidura de Rajoy como Presidente del gobierno central obliga a encender alguna alarma. Esa decisión es absolutamente incomprensible desde una perspectiva de izquierda vasca. Por más explicaciones que se den, máxime si la principal es no interferir en la gobernabilidad de España, aparece como absolutamente indiferente a lo que supone un gobierno así para las clases populares de todo el Estado... y de Hego Euskal Herria. ¿Se abstendrá Amaiur cada vez que el Gobierno vote una ley de recortes sociales o derechos civiles? Pues el resumen de esas leyes estaba en el discurso de investidura de Rajoy. Esperemos que sea una inmadurez política momentánea y se restablezca la voluntad de tejer complicidades.

Hay otras complicidades a tejer. Dentro de la propia Euskal Herria, la más importante es la necesidad de recobrar comunicación y, sobre esa base, colaboración entre la izquierda abertzale y el sindicato ELA. Hoy la relación es peor que tensa y tampoco parece haber buenos augurios para las propias relaciones entre los sindicatos ELA y LAB. Pero desde un extremo respeto a los

espacios de cada uno, más aún, considerando imprescindible que exista un análisis y una contribución crítica del mundo sindical a la gestión institucional de Bildu y a la acción parlamentaria de Amaiur, superar el desencuentro actual es imprescindible. LAB tiene delante el complejo e interesante escenario de, por una parte, tener que pesar más en la política de la izquierda abertzale para que las posiciones de izquierda socialista ganen mayor peso en ese movimiento popular interclasista y, por otra, mantener una real y visible autonomía (crítica cuando haga falta) con la gestión de Bildu. Ambos sindicatos deben jugar un papel dinámico y anticapitalista en el nuevo escenario. Pero ELA, desde esa misma perspectiva, debería poner su capacidad constructiva y su capacidad crítica en vinculación con las fuerzas políticas y sociales que impulsan el soberanismo y se identifican con una perspectiva de izquierda social en Euskal Herria, incluido con Bildu.

Queda por saber qué va a pasar con Sortu cuando sea legal. Quizá Bildu y Amaiur se mantengan como plataformas electorales en las que Sortu entre como una cuarta fuerza política. En ese u otro escenario éste es un buen momento para que toda la izquierda anticapitalista vasca se plantee tejer complicidades que permitan avanzar en el proceso constitutivo de un movimiento socialista unitario y plural; sea en Sortu o con Sortu.

Petxo Idoyaga forma parte del consejo asesor de *VIENTO SUR*.

Bibliografía citada:

- Idoyaga P. (2008) “El conflicto vasco sin horizonte político”. *VIENTO SUR*, 97, 84-91.
Idoyaga P. y Zallo R. (2003) “El sentido y la viabilidad del Plan Ibarretxe”. *VIENTO SUR*, 72, 94-103.